



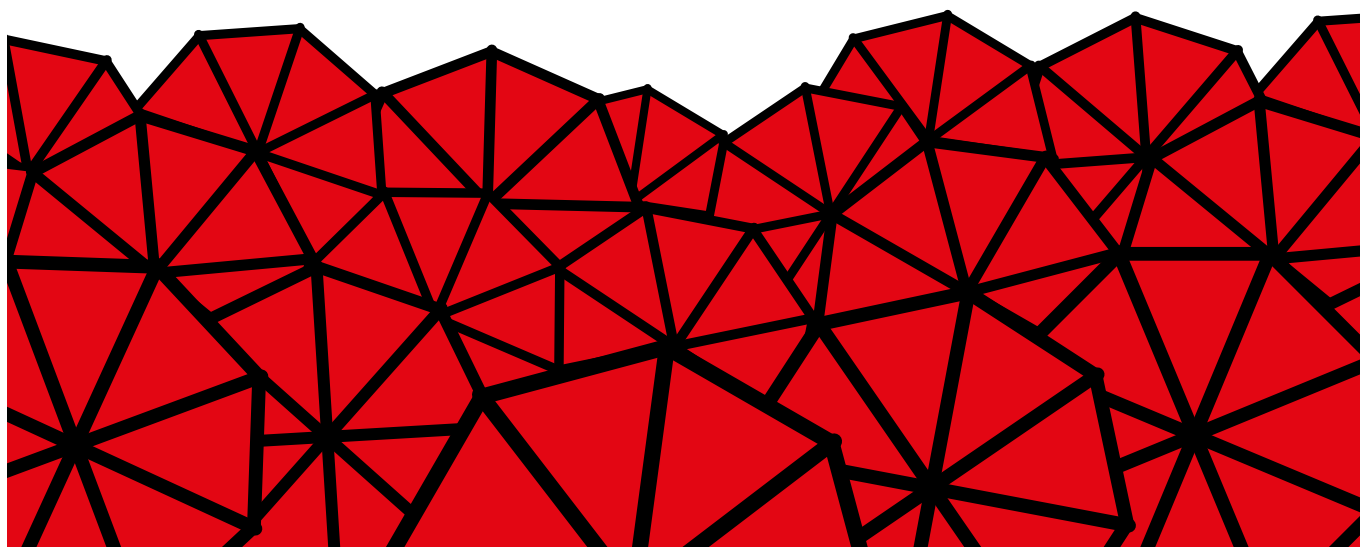
**Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual**  
Promover los Derechos Humanos y de la Salud

**DOCUMENTO  
INFORMATIVO**

**#07**

**EL TRABAJO SEXUAL Y EL DERECHO**

**Una comprensión de los  
marcos jurídicos y la  
lucha por las reformas  
de las leyes sobre  
trabajo sexual**



## EL TRABAJO SEXUAL Y EL DERECHO

# Una comprensión de los marcos jurídicos y la lucha por las reformas de las leyes sobre trabajo sexual

El movimiento a favor de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual tiene un largo historial en la realización de campañas contra las leyes que violan

**Uno de los valores fundamentales de la NSWP es la oposición a todas las formas de criminalización u otras opresiones legales del trabajo sexual**

sus derechos. Uno de los valores fundamentales de la NSWP es la oposición a todas las formas de criminalización u otras opresiones legales del trabajo sexual que afectan a las personas que ejercen el trabajo sexual, sus clientes, terceras personas relacionadas<sup>1</sup>, sus familias, parejas y amistades. Los esfuerzos de defensa de derechos también contemplan

la reforma de las prácticas policiales y la aplicación de la ley, lo que es inseparable de la ley en sí misma y que, en muchas ocasiones, incluye extorsión, corrupción y acoso discriminatorio de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Este documento informativo describe los diferentes marcos legislativos que se utilizan para reprimir el trabajo sexual y criminalizar a las personas que ejercen el trabajo sexual, incluidos los marcos normativos opresivos. También ofrece información sobre el lenguaje y los principios compartidos por los miembros de la NSWP cuando hacen trabajo de defensa a favor de reformas legales que respeten y protejan los derechos humanos y laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual.

## Los marcos jurídicos y las estrategias de reformas de la ley

Entre los grupos miembros de la NSWP, las estrategias de reformas legales y el lenguaje utilizado para defenderlas difieren considerablemente, teniendo en cuenta la gran variedad de marcos legislativos que existen y los valores históricos, culturales y políticos de los diferentes países y regiones.

La derogación de las leyes penales que persiguen el trabajo sexual no detendrá por sí sola la tremenda opresión legal que padecen las personas que ejercen el trabajo sexual, la cual se produce de muy diferentes maneras. Algunos miembros de la NSWP se centran más en reformar

<sup>1</sup> La expresión "terceras personas relacionadas" incluye a empresarios, propietarios y encargados de burdeles, recepcionistas, personal de limpieza, taxistas, hoteles que alquilan habitaciones a personas que ejercen el trabajo sexual y cualquier otra persona considerada facilitadora del trabajo sexual.

la “práctica legal” que en las propias leyes. La práctica legal tiene que ver en cómo la policía, los jueces y otros poderes del Estado aplican las leyes. En algunas partes del mundo las infracciones administrativas y las leyes de orden público se utilizan para perseguir a las personas que ejercen el trabajo sexual; por eso, algunos miembros de la NSWP exigen cambios en las sanciones, los procedimientos y las prácticas de las leyes administrativas y de orden público.

Es muy importante, a la hora de discutir las reformas legales, que facilitemos definiciones precisas de las diferentes terminologías y abordajes adoptados por la NSWP y sus miembros. Los términos clave que utilizamos para la defensa de las reformas jurídicas sobre el trabajo sexual son descriminalización, despenalización, legalización y criminalización.

## La descriminalización

El término “descriminalización” tiene una utilización histórica y política en el seno del movimiento a favor de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Es el término que más claramente refleja el valor fundamental de la NSWP firmado por todos los grupos miembros: la oposición a **toda** forma de criminalización y otras opresiones legales del trabajo sexual y las personas que lo ejercen.

### Leyes penales

Las leyes penales castigan acciones o conductas que los gobiernos determinan como nocivas o perjudiciales para la sociedad. Las mismas leyes penales pueden aplicarse en todo un país o pueden existir diferentes leyes para diferentes regiones de un mismo país. Con frecuencia, las leyes penales se aplican de forma discriminatoria según los tipos de trabajo sexual debido, entre otros factores, a la etnia, el origen nacional o social, el género o la identidad de género, la orientación sexual, la diversidad funcional, la condición o no de VIH-positivo, el uso de drogas o la condición de extranjería de la persona que ejerce el trabajo sexual.

Las leyes penales específicas para el trabajo sexual (casi siempre llamadas leyes sobre prostitución)<sup>2</sup> suelen ser usadas para criminalizar no solamente a las personas que ejercen el trabajo sexual sino también a los clientes, terceras partes relacionadas con ellas, sus familias, parejas y amistades. Las leyes dirigidas específicamente a las personas que ejercen el trabajo sexual incluyen disposiciones que ilegalizan solicitar, publicitar y vender servicios sexuales (en espacios cerrados y/o abiertos) o trabajar colectivamente con otras personas que ejercen el trabajo sexual. Los clientes son criminalizados por las leyes que ilegalizan el acto de solicitar o comprar sexo. Por su parte, las leyes relativas a la propiedad, la administración de un burdel o “hallarse” en él, ser mantenido por las ganancias de una persona que ejerce el trabajo sexual o apoyarla para emigrar o cruzar fronteras con la intención de vender servicios sexuales, criminaliza potencialmente a las terceras partes relacionadas con ellas, familias, parejas y amistades. Estas leyes también se utilizan para retener a la fuerza a las personas que ejercen el trabajo sexual bajo el pretexto de su “rehabilitación”.

**El término “descriminalización” que más claramente refleja el valor fundamental de la NSWP firmado por todos los grupos miembros: la oposición a toda forma de criminalización y otras opresiones legales del trabajo sexual y las personas que lo ejercen**

<sup>2</sup> El término “prostitución” es utilizado en este documento únicamente para indicar el modo en que las leyes hacen referencia al trabajo sexual. El uso del término “trabajo sexual” en el resto del documento es intencionadamente político, y habla del valor fundamental de la NSWP referido al reconocimiento del trabajo sexual como trabajo.

## **Las leyes penales perpetúan el estigma y la discriminación y dan lugar a graves violaciones de sus derechos humanos**

Las leyes penales respecto al trabajo sexual a menudo se presentan como “protectoras”, ya sea de la victimización a las personas que ejercen el trabajo sexual o de la alteración del orden público a la sociedad. Sin embargo, en la práctica, estas leyes niegan la agencia de las personas que ejercen el trabajo sexual y *limitan* sus derechos.

Las leyes penales perpetúan el estigma y la discriminación y dan lugar a graves violaciones de sus derechos humanos.

Para perseguir a las personas y a los negocios del trabajo sexual, la policía recurre con frecuencia a la confiscación de condones y otros objetos personales como prueba de actividad delictiva. Esta

práctica pone en riesgo la salud de las personas que ejercen el trabajo sexual y es una violación de su derecho a la intimidad. El uso de las leyes penales contra el trabajo sexual se traduce en un mayor número de personas que ejercen el trabajo sexual con antecedentes penales, con una gran repercusión en sus oportunidades, entre ellas, el acceso a la vivienda, al empleo, a la educación y el derecho al voto.

### **La definición de la descriminalización**

Algunos grupos de personas que ejercen el trabajo sexual utilizan la “descriminalización” para indicar la inexistencia de leyes penales que prohíban el trabajo sexual u otras actividades asociadas al mismo, como la administración de un burdel. Otros grupos se refieren a una “descriminalización total” como parte de una amplia gama de reformas necesarias para el usufructo de derechos para las personas que ejercen el trabajo sexual y otras comunidades marginalizadas, como parte de una estrategia “anti-criminalización”, que contempla no solo las leyes penales sino la eliminación de toda opresión legal. Esto pone de relieve el hecho de que, pese a la inexistencia de leyes específicas contra el trabajo sexual, las personas que lo ejercen, los clientes, las terceras partes relacionadas, las familias, parejas y amistades continúan siendo criminalizados a través de otras leyes. Los ejemplos incluyen leyes contra la vagancia, la alteración del orden público, la obscenidad, el consumo de drogas o las leyes contra la homosexualidad o el travestismo. La policía y otros funcionarios públicos continúan usando abusivamente estas leyes contra las personas que ejercen el trabajo sexual.

Con frecuencia se produce la confusión en torno al término “descriminalización” porque dicho término ha sido apropiado por los grupos anti-trabajo sexual para aplicarlo en lo que denominan “descriminalización parcial”. Estos grupos buscan criminalizar a los clientes y a las terceras partes relacionadas pero no a las personas que ejercen el trabajo sexual, con el objetivo de erradicar la demanda de trabajo sexual. La NSWP y sus miembros rechazan la idea de la “descriminalización parcial” y considera cualquier “erradicación de la demanda” como criminalización, un abordaje que igualmente alimenta y exacerba el estigma contra las personas que ejercen el trabajo sexual.

La descriminalización, para algunos, no necesariamente implica la ausencia de algún tipo de regulación que tenga como objetivo respetar y proteger los derechos humanos y laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual, tales como la salud laboral y normas de seguridad. Esto es bien distinto de una legalización donde la regulación estatal está pensada para controlar y limitar el trabajo sexual y son, casi siempre, aplicadas por la policía.

*“Utilizamos este término como un término históricamente importante, que fue difundido en diferentes debates y está documentado, desde hace varias décadas, en la investigación y en la literatura sobre el trabajo sexual. En Nueva Zelanda hablamos de que el trabajo sexual había sido descriminalizado cuando, por ejemplo, las leyes contra el trabajo sexual (solicitud en el espacio público, administración de burdeles, etc.) fueron derogadas, lo que permitió a las personas que ejercen el trabajo sexual trabajar desde modelos laborales también comunes para muchas otras ocupaciones. Sin embargo, hay que decir que Nueva Zelanda no tiene un modelo puro de descriminalización, sino que es una mezcla de descriminalización y legalización.” (NZPC/ Nueva Zelanda)*

**“Estamos haciendo campaña para la descriminalización del trabajo sexual. También quisiéramos ver leyes anti-discriminación y que se introdujeran reformas legislativas de protección positivas...”**

*“Estamos haciendo campaña para la descriminalización del trabajo sexual. También quisiéramos ver leyes anti-discriminación y que se introdujeran reformas legislativas de protección positivas, sin la participación de la policía ni con procesos de licitud dificultosos para los burdeles. Que todos los reglamentos relacionados con el trabajo sexual fueran eliminados y que se estableciera la prohibición de utilizar reglamentos contra las personas que ejercen el trabajo sexual, tales como el referido al vagabundeo o a la indecencia pública.” (SWEAT, Sudáfrica)*

*“En los Estados Unidos algunos usan el término “descriminalización” pero esto es sólo una parte de un proceso muy minucioso de reforma legislativa que precisa ser realizado estado por estado y también a nivel federal. Diferentes grupos en los Estados Unidos no utilizan el término “descriminalización” debido a que este puede restringir el activismo para centrarlo exclusivamente en la eliminación de leyes específicas referidas a la prostitución, lo que en sí mismo no resuelve ni remotamente la compleja y extrema criminalización de las comunidades de personas que ejercen el trabajo sexual, las personas en el comercio sexual y las comunidades vinculadas al mismo en los Estados Unidos.” (Best Practices Policy Project, EE.UU)*

## La despenalización

La despenalización es un término utilizado en contextos donde las personas que ejercen el trabajo sexual no son controladas mediante leyes penales pero sí lo son a través de infracciones administrativas y otras leyes de orden público.

### Infracciones administrativas

En muchas ocasiones, las infracciones administrativas son creadas por el estado para abordar los asuntos relacionados con el orden público y la seguridad. Si bien es cierto que podemos considerarlas faltas “menores” en comparación a los delitos, aún hoy su cumplimiento está en manos de la policía y con frecuencia acaban en severos castigos, entre ellos fuertes multas y penas de cárcel. En muchos casos, las infracciones administrativas desempeñan en el control del trabajo sexual un papel más relevante que las leyes penales y, en otros casos, se superponen o se utilizan conjuntamente con la ley penal.

Las infracciones administrativas -directa e indirectamente- reprimen o controlan tanto a las personas que ejercen el trabajo sexual como a los comercios vinculados con el trabajo sexual. Algunos países cuentan con infracciones administrativas específicas para el trabajo sexual mientras que otros utilizan otras infracciones de carácter general para perseguir a las personas que ejercen el trabajo sexual, tales como las referidas al vagabundeo, la indecencia pública o los códigos de vestimenta públicos. Los castigos por estas infracciones pueden incluir restricciones de libertad de movimiento, por las cuales las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen permitido acceder a determinadas áreas de una ciudad, se las obliga a realizarse exámenes de VIH e ITS o a recibir rehabilitaciones forzadas.

### **Leyes de orden público**

Las leyes de orden público controlan el uso del espacio público y repercuten en cómo y dónde las personas que ejercen el trabajo sexual y los negocios del sexo de pago pueden implantarse. Estas leyes pueden incorporar licencias obligatorias para los negocios de trabajo sexual o restricciones espaciales que incluyan zonas “de libre prostitución”. Así, pueden repercutir negativamente en las personas que ejercen el trabajo sexual dependiendo de cómo se implementen. Por ejemplo, los regímenes de licencia que exigen que las personas que ejercen el trabajo sexual y los negocios dispongan sus licencias públicamente, con sus nombres completos, puede incrementar la estigmatización y conllevar prácticas laborales injustas. Las restricciones espaciales que ubican a las personas que ejercen el trabajo sexual en zonas más aisladas pueden repercutir en la salud laboral y la seguridad, así como incrementar el riesgo de violencia contra ellas.

El incumplimiento de las leyes de orden público puede ocasionar sanciones que a menudo son desproporcionadas y extremadamente severas. Los castigos con frecuencia incluyen multas pero también pueden significar detención en la estación de policía, o largas penas de cárcel. Frecuentemente, el encarcelamiento se usa en caso de reincidencia o por multas impagadas.

***Estas leyes se acompañan con frecuencia de directrices redactadas sin rigor que otorgan a las autoridades amplio margen para su interpretación. Algunos miembros de la NSWP denuncian que esto puede ser utilizado como pretexto para prácticas policiales ilegales como la extorsión o la violencia***

Las leyes de orden público de diferentes clases, las infracciones administrativas y las prácticas legales trabajan casi siempre de manera entrelazada. En algunos contextos, por ejemplo, si una persona que ejerce el trabajo sexual recibe una multa debido a una infracción administrativa que prohíbe el trabajo sexual autónomo, esta pueden ser detenida y obligada a realizarse pruebas en virtud de otra ley de salud pública. Estas leyes se acompañan con frecuencia de directrices redactadas sin rigor que otorgan a las autoridades amplio margen para su interpretación. Algunos miembros de la NSWP denuncian que esto puede ser utilizado como pretexto para prácticas policiales ilegales como la extorsión o la violencia.



### **La despenalización y la descriminalización: relacionadas pero distintas**

La despenalización y la descriminalización están estrechamente relacionadas pero tienen diferentes significados. La despenalización se centra en eliminar o reformar normas administrativas y leyes de orden público para que estas ya no sean utilizadas para controlar y penalizar a las personas que ejercen el trabajo sexual. Por su parte, la descriminalización está centrada en la eliminación de leyes penales y otras opresiones legales.

En los países donde las infracciones administrativas y las leyes de orden público se utilizan contra las personas que ejercen el trabajo sexual, también pueden existir leyes penales que criminalizan otros aspectos del trabajo sexual, como es la implicación de terceras partes relacionadas con ellas. Por consiguiente, la NSWP y sus miembros demandan la descriminalización y la despenalización. La NSWP utiliza el término “descriminalización” para abarcar tanto la derogación de las leyes

penales como de las infracciones administrativas, las de orden público o las leyes de salud pública que se utilizan contra las personas que ejercen el trabajo sexual.

**“Existe mucha confusión debido a que el trabajo sexual a título individual en los espacios públicos es una infracción administrativa, mientras que el resto de actividades asociadas al trabajo sexual (la organización, la mediación, la oferta de espacios) son delitos penales, y la gente tiende a pensar que todas son actividades delictivas.”**

“Las personas que ejercen el trabajo sexual quieren que la despenalización sea añadida al marco legal de la República de Macedonia. Esto evitaría las malas interpretaciones y el uso erróneo de las leyes por parte de las instituciones gubernamentales.” (STAR-STAR, Macedonia)

“Existe mucha confusión debido a que el trabajo sexual a título individual en los espacios públicos es una infracción administrativa, mientras que el resto de actividades asociadas al trabajo sexual (la organización, la mediación, la oferta de espacios) son delitos penales, y la gente tiende a pensar que todas son actividades delictivas.” (HOPS, Macedonia)

### **La legalización**

La legalización es un término que, frecuentemente, se confunde con la descriminalización. La descriminalización tiene que ver con la eliminación o la ausencia de leyes penales o de otra índole que oprimen a las personas que ejercen el trabajo sexual, mientras que la legalización se refiere al hecho de introducir leyes cuyo objetivo sea la imposición de la reglamentación estatal y el control del trabajo sexual. Entre los ejemplos se incluyen las leyes acerca de los establecimientos de trabajo sexual que restringen su número, su ubicación e imponen el reglamento de funcionamiento; o bien las leyes de salud pública que imponen registros obligatorios o pruebas de VIH e ITS a las personas que ejercen el trabajo sexual.

En los marcos legalistas, casi siempre es la autoridad policial quien actúa como regulador para garantizar que las personas que ejercen el trabajo sexual y los establecimientos de trabajo sexual cumplen con las reglas. El incumplimiento por parte de las personas que ejercen el trabajo sexual o los establecimientos de trabajo sexual conlleva el riesgo de multas, el aumento de la vigilancia policial, redadas en los locales y acusaciones.

Esto produce un sistema de dos niveles, esto es, personas que ejercen el trabajo sexual “legales” y personas que ejercen el trabajo sexual “ilegales”, lo que puede propiciar condiciones laborales de explotación y en violaciones de los derechos humanos en el caso de aquellas que se encuentran en una situación administrativa irregular. Las sanciones penales pueden ser, por tanto, aplicadas debido al incumplimiento de las condiciones de la legalización.

Algunas personas también confunden el marco de la legalización con el concepto de trabajo sexual legalmente reconocido o “legal”, ideas que, de hecho, son muy distintas. La NSWP hace campaña para el *reconocimiento* legal del trabajo sexual como trabajo y para garantizar los derechos legales de las personas que lo ejercen. Por su parte, la *legalización* puede ser altamente estigmatizadora e intenta imponer el control estatal o limitar el trabajo sexual. La legalización, en la práctica, puede significar muchas restricciones acerca de cómo, cuándo y dónde se realiza el trabajo sexual, creando así un grupo de “ilegales o incumplidoras” entre las personas que ejercen; en el mismo sentido, la legalización otorga excesivos poderes de actuación tanto a la policía como a otras autoridades oficiales. Algunos grupos de personas que ejercen el trabajo sexual utilizan el “lenguaje de la legalización” para expresar su deseo de normativas comerciales y laborales que deberían acompañar el reconocimiento legal del trabajo sexual como trabajo, toda vez que rechazan las leyes y políticas que estigmatizan, limitan o controlan el trabajo sexual de manera discriminatoria.

## La criminalización

La criminalización se refiere al marco legislativo cuyas leyes convierten el trabajo sexual o las actividades vinculadas con el mismo (como la administración de un burdel) en delitos. Las leyes penales son aplicadas por la policía y otras fuerzas del orden y tienen como consecuencia la detención, el procesamiento y el castigo (incluida la cárcel) para las personas que ejercen el trabajo sexual.

Los miembros de la NSWP rechazan cualquier forma de criminalización del trabajo sexual, lo que incluye tanto a las personas que lo ejercen como a sus clientes, las terceras partes relacionadas con ellas, familias, parejas y amistades. Algunos países no tienen leyes penales específicas

para el trabajo sexual pero sí utilizan otras leyes penales para oprimir a las personas que ejercen el trabajo sexual. Los miembros de la NSWP también rechazan esta forma de criminalización.

La criminalización tiene efectos devastadores en los derechos de salud y humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Muy a menudo conlleva tener antecedentes penales en caso de

condena, lo que repercute en sus posibilidades de acceder a los servicios, a la vivienda, a la posibilidad de migrar, a su reputación, a futuras oportunidades laborales, así como en su derecho a acceder o mantener la custodia de sus hijos e hijas. Las personas que ejercen el trabajo sexual tienen que trabajar aisladas cuando trabajan en un sistema jurídico criminalizador, lo que las vulnerabiliza ante la extorsión y la violencia. Es más: la criminalización alimenta el estigma que enfrentan las personas que ejercen el trabajo sexual, lo que propicia un clima de impunidad para quienes cometen violencias contra ellas.

**La criminalización tiene efectos devastadores en los derechos de salud y humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual.**



Con frecuencia, se utiliza la errónea diferenciación entre criminalización “total” o “parcial”. Como señalamos anteriormente, algunos se refieren a la legislación que criminaliza a los clientes pero no a las personas que ejercen el trabajo sexual como *criminalización parcial*. En Suecia y otros países, algunos funcionarios públicos y lobbies anti-trabajo sexual pueden llamar –errónea o deliberadamente- descriminalización a estos modelos legislativos. Sin embargo, la NSWP rechaza la idea de que el trabajo sexual pueda ser “parcialmente” criminalizado. Los miembros de la NSWP tienen claro que la criminalización de cualquier aspecto u ámbito del trabajo sexual es perjudicial para las personas que lo ejercen. Además, la NSWP también se opone a la criminalización de las terceras partes y rechaza las leyes contra la administración de los burdeles. La criminalización, incluyendo la ejercida contra los clientes y las terceras partes, incrementa la represión policial de las personas que ejercen el trabajo sexual, legitima la discriminación contra ellas en el acceso a los servicios y alimenta todas las formas de estigmatización. Todo ello tiene como consecuencia un grave daño para las personas que ejercen el trabajo sexual, que incluye experiencias de violencia impune contra ellas y obstáculos para acceder a la justicia.

**Además de las leyes específicas relativas al trabajo sexual que criminalizan y penalizan a las personas que lo ejercen, existen otras leyes que, en la práctica, se utilizan para oprimir e imponer el control estatal sobre el trabajo sexual y las personas que lo ejercen.**

## Otras opresiones legales del trabajo sexual

Además de las leyes específicas relativas al trabajo sexual que criminalizan y penalizan a las personas que lo ejercen, existen otras leyes que, en la práctica, se utilizan para oprimir e imponer el control estatal sobre el trabajo sexual y las personas que lo ejercen. Si bien en todo el mundo el contexto legal difiere ampliamente, la mayoría de países tienen alguna combinación de los siguientes tipos de leyes.

### 1 Leyes penales no referidas específicamente al trabajo sexual

Existen muchas leyes penales que no tienen que ver específicamente con el trabajo sexual pero que tienen, directa o indirectamente, una gran repercusión en el trabajo sexual y perjudica a las personas que lo ejercen, los clientes, las terceras partes, familias, parejas y amistades.

- **Las leyes anti-tráfico.** Son leyes que pueden ser –y de hecho lo son casi sin excepción- utilizadas contra las personas que ejercen el trabajo sexual que emigran por trabajo, placer, aventura o por mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Los delitos de tráfico son considerados graves y pueden traducirse en arresto, detención, “rehabilitación” forzosa, procesamiento y largas sentencias de cárcel.

Las leyes anti-tráfico son a menudo burdas y utilizan estereotipos generalizados respecto a los trabajadores migrantes. Estas leyes raramente distinguen entre migración legal voluntaria, migración voluntaria utilizando otros agentes (cruce de fronteras clandestino fuera de los circuitos legales) y el tráfico de personas.

Las leyes anti-tráfico están a menudo apoyadas por iniciativas que alientan las redadas en los lugares de trabajo con el propósito de “rescatar” a las víctimas de tráfico. Estas iniciativas son gravemente perjudiciales para las personas migrantes que ejercen el trabajo sexual (también para quienes no lo son) ya que casi siempre se las detiene y deporta tras las redadas. En el caso de las personas no migrantes que ejercen el trabajo sexual también pueden ser desalojadas de sus hogares u obligadas a insertarse en programas de “rehabilitación”. A menudo son liberadas únicamente por mediación de miembros de su familia, sin importar que ya no vivan con ella o que la familia no sepa que se dedica al trabajo sexual. En la India, a las personas que ejercen el trabajo sexual se les pide que ofrezcan un compromiso verbal o garantías de que “abandonarán” el trabajo sexual como condición para ser liberadas y “custodiadas” por sus parientes; a menudo permanecen “en periodo de prueba” durante varios años.

Como estrategia para evitar la encarcelación y una más que probable deportación, las personas migrantes que ejercen el trabajo sexual se autodefinirán, en bastantes ocasiones, como víctimas de tráfico

y hablarán en contra de las personas con las que trabajan o para quienes trabajan, o contra las personas que las apoyaron en el proyecto migratorio. Para evitar las “redadas de rescate”, las personas que ejercen el trabajo sexual pueden adaptar y cambiar la forma en que trabajan, forzadas a una mayor clandestinidad, lo que las coloca en una situación de mayor riesgo respecto a sus derechos, su salud y su seguridad, creándoles miedo a acceder a los servicios. La formulación en las leyes anti-tráfico de toda forma de trabajo sexual como explotación tiene

**Para evitar las “redadas de rescate”, las personas que ejercen el trabajo sexual pueden adaptar y cambiar la forma en que trabajan, forzadas a una mayor clandestinidad...**

como consecuencia que, la explotación laboral, cuando esta existe, permanece sin resolverse. Esto invisibiliza, todavía más, la agencia de las personas que ejercen el trabajo sexual en su elección de trabajo.

En la mayoría de ocasiones, a las víctimas de tráfico identificadas como tales se las acusa de delitos penales relacionados con cualquier actividad para la que fueron traficadas. Son además doblemente castigadas al ser devueltas al país y a la situación de partida, sin tener en cuenta la necesidad de protección y sin que se les ofrezca la posibilidad de solicitar asilo.

**“El tráfico de seres humanos es ilegal pero las leyes son incompletas y no priorizan a las víctimas. Incluso a las víctimas de tráfico identificadas por ONG especializadas no se les ofrece protección ni asilo.”**  
(VAMP y Sangram, India)

- **Las leyes en materia de drogas** que ilegalizan la posesión y el uso de drogas se utilizan para arrestar a las personas que ejercen el trabajo y a terceras partes relacionadas en los contextos donde el trabajo sexual y las drogas se superponen. Muchas veces, las personas que ejercen el trabajo sexual y los establecimientos de trabajo sexual son más visibles y considerados como un objetivo fácil para la policía. Las detenciones por drogas a veces se traducen en la emisión de órdenes prohibiendo a las personas que ejercen el trabajo sexual el acceso a zonas donde están los servicios de salud y sociales imprescindibles.

También se les obliga a ingresar en centros de rehabilitación de drogas, muchas veces exigiéndoles que abandonen el trabajo sexual. En algunos países las sentencias de penas mínimas obligatorias se deben a violaciones de las leyes sobre drogas y los jueces no pueden tener en cuenta las circunstancias del caso e imponer castigos menos severos.

- **Las leyes contra las identidades de género y la libre expresión del género**, que incluyen leyes contra el travestismo destinadas a las personas trans<sup>3</sup> que ejercen el trabajo sexual.
- **Las leyes contra la homosexualidad** son utilizadas contra los hombres y los transexuales que ejercen el trabajo sexual y que tienen sexo con otros hombres.
- **Las leyes contra la indecencia, la obscenidad o la inmoralidad** son utilizadas con frecuencia de manera generalizada y pueden ser usadas contra las personas que ejercen el trabajo sexual.
- **Las leyes relativas a la exposición y la transmisión del VIH** son leyes penales utilizadas contra las personas que viven con el VIH cuando no revelan que son VIH-positivas antes de un contacto sexual, exponen a alguien al VIH, transmiten el virus o comparten material para el consumo de drogas. En algunas jurisdicciones, las personas que viven con el VIH enfrentan sanciones graves y penas de prisión por no revelar su condición de VIH-positiva, sin importar si realizan prácticas de sexo seguro con sus compañeros sexuales.

Estas leyes omiten el reconocimiento de la responsabilidad compartida que existe entre dos compañeros sexuales cuando se trata de tomar decisiones respecto a su propia salud sexual, y sirven para demonizar

**...sirven para demonizar a las personas que viven con el VIH a la vez que comprometen gravemente su derecho a la confidencialidad.**

a las personas que viven con el VIH a la vez que comprometen gravemente su derecho a la confidencialidad. Las leyes también presionan a las personas que ejercen el trabajo sexual para dar a conocer su condición de VIH-positivas en condiciones en las que pueden ser vulnerables al estigma, la discriminación y la violencia. Además, en algunos países, la información acerca de las personas VIH-positivas (acompañada muchas

veces por una fotografía) se ha distribuido ampliamente en los medios de comunicación, situando a las personas en una situación de alto riesgo de represalias y violación de su derecho a la intimidad.

- **Las leyes contra la obstrucción a la justicia** son a menudo confusas y garantizan a la autoridad policial el poder de detener a personas por actos no determinados. Por ejemplo, las personas que ejercen el trabajo sexual pueden ser acusadas únicamente por no cooperar con la policía o cuestionar las prácticas policiales cuando están bajo arresto o por amenazas de ser detenidas.
- **Las leyes de vagancia** se dirigen ampliamente a las personas consideradas “indeseables”, que pueden ser sospechosas de actividades delictivas y persiguen a las personas que ejercen el trabajo sexual de manera desproporcionada y discriminatoria. Algunas de estas leyes tienen estatus de delito y sancionan por el solo hecho de “ser” una persona que ejerce el trabajo sexual en público. Otras criminalizan el hecho de estar en el espacio público durante un largo periodo de tiempo.

<sup>3</sup> “Trans” es un término utilizado para incluir a varias comunidades. Las personas que ejercen el trabajo sexual en todo el mundo utilizan diferente terminología para referirse a las comunidades trans, que incluye, entre otros: transgénero, transexual, travesti, personas disconformes con su género, hijra de India y Pakistán y los two-spirited o “espíritus dobles” de los pueblos originarios de América del Norte.

## 2 Las leyes y las políticas de salud pública

Las leyes de salud pública permiten al gobierno y a las autoridades establecer reglas y normativas con el propósito de prevenir las enfermedades. Estas pueden ser represivas y normalmente no tienen en cuenta la realidad vivida por el estigma y la discriminación que enfrentan las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, estas leyes convierten a la policía en los responsables del cumplimiento de las prácticas de salud y seguridad, lo que es del todo inapropiado y contraproducente. Estas leyes existen aisladamente o, en ocasiones, forman parte del derecho penal.

Las leyes y políticas de salud pública utilizadas contra las personas que ejercen el trabajo sexual incluyen las siguientes:

- **Programas de uso obligatorio del condón** (a veces llamados Programas de Uso del Condón 100% o CUP, por sus siglas en inglés) tanto en los países que criminalizan el trabajo sexual como en los que no. El CUP 100% fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), iniciada en Tailandia en 1991. A menudo, los programas de uso del condón cuentan con acuerdos entre las autoridades de salud pública y las autoridades policiales, donde se indica que la policía no realizará redadas en los burdeles que cumplan con las normativas de uso del condón. Como consecuencia, el poder de la policía sobre las personas que ejercen el trabajo sexual se ha incrementado, así

como también las prácticas policiales corruptas. Los grupos de personas que ejercen el trabajo sexual informan que la mayoría de los condones gratuitos distribuidos por el programa se les entrega a los dueños de burdeles en lugar de hacerlo a ellas mismas, lo que aumenta el control de los empleadores sobre su salud y su seguridad. Los propietarios entregan los condones a los clientes, lo que limita aún más el control de la persona que ejerce el trabajo sexual acerca de su uso una vez dentro. Aparte de recibir educación elemental acerca del VIH, las personas que ejercen el trabajo sexual no tuvieron un rol activo en el

**...las personas que ejercen el trabajo sexual no tuvieron un rol activo en el diseño y desarrollo del llamado CUP 100%, de modo que disminuyó su autonomía y se ignoraron las condiciones de trabajo deficientes y abusivas.**

diseño y desarrollo del llamado CUP 100%, de modo que disminuyó su autonomía y se ignoraron las condiciones de trabajo deficientes y abusivas. En algunos países el programa también conlleva pruebas de ITS y VIH altamente coercitivas para las personas que ejercen el trabajo sexual.

*“La política del Uso del condón 100% tiene que ser eliminada. En su lugar, se deben implementar programas que apoyen la autonomía sexual y la seguridad, así como condiciones de trabajo justas.” (EMPOWER, Tailandia)*

*“Como organización, nosotros no apoyamos el apartado donde se establecen las medidas a tomar para garantizar relaciones sexuales más seguras. Algunas personas que ejercen el trabajo sexual pueden encontrarlas útiles porque pueden decirle a sus clientes que el sexo no seguro va contra la ley y, por tanto, garantizar que el cliente utilice el condón. Sin embargo, este apartado puede también utilizarse contra las personas que ejercen el trabajo sexual y por ello no lo apoyamos. Una vez más, las personas que ejercen el trabajo sexual no deberían ser marcadas, sino que la salud pública general junto a las leyes de seguridad y salud en el trabajo deberían ser aplicadas.” (NZPC, Nueva Zelanda)*

**...prácticas médicas coercitivas que violan el derecho de las personas que ejercen el trabajo sexual a no sufrir un trato degradante, así como sus derechos relativos a la integridad física y a la intimidad.**

► **Los registros obligatorios** por parte de la policía y las autoridades sanitarias son impuestos a las personas que ejercen el trabajo sexual en algunos países. Estos registros atentan contra la confidencialidad y su derecho a la intimidad y afecta a sus oportunidades laborales más allá del trabajo sexual, la educación y el acceso a la justicia, al existir una constancia de su trabajo en el ámbito del sexo, o sea, en un contexto estigmatizado. Las personas que ejercen el trabajo sexual con frecuencia son reacias a dichos registros debido al estigma y la consecuente discriminación en torno al trabajo sexual. El no registrarse crea una categoría de trabajadores ilegales o no reconocidos, lo que limita aún más su acceso a la salud y a otros servicios.

► **Las pruebas obligatorias de VIH e ITS** son prácticas médicas coercitivas que violan el derecho de las personas que ejercen el trabajo sexual a no sufrir un trato degradante, así como sus derechos relativos a la integridad física y a la intimidad. Este hecho puede comportar el incremento de la demanda de sexo no seguro por parte de los clientes, basándose en el pretexto de que las personas que ejercen el trabajo sexual son examinados periódicamente. Las pruebas obligatorias también perpetúan los estereotipos infundados acerca de ellas como las transmisoras del VIH y las ITS. Incluso, cuando las pruebas no son obligatorias por ley, en ocasiones son las ONG que trabajan con ellas quienes las estipulan, de modo que en la práctica sí son obligatorias. Esto ahuyenta de los servicios

sanitarios a las personas que ejercen el trabajo sexual y puede significar programaciones muy coercitivas y una atención sanitaria deficitaria. En algunos países, las pruebas del VIH son obligatorias bajo la amenaza de arresto y existen disposiciones, incluso en algunos estados de India, para segregar a las personas que ejercen el trabajo sexual a quienes se les ha diagnosticado VIH o ITS. En muchos países, la policía obligará a las personas que ejercen el trabajo sexual a atenderse en hospitales especiales donde deben pagar los exámenes médicos. En algunos lugares, el estado de salud de las personas que ejercen el trabajo sexual queda registrado en bases de datos.

*“Todas las pruebas obligatorias son contraproducentes y discriminatorias... Deberían darse mejores condiciones para pruebas voluntarias, anónimas, así como información honesta acerca los riesgos, en lugar de avivar el miedo.”*  
(Hydra, Alemania)

► **Las regulaciones sobre la no revelación de ser VIH-positiva, la transmisión o la exposición** al virus existen tanto en las leyes de salud pública como en la ley penal. Algunos países promulgan leyes y normativas para obligar a las personas que viven con VIH a revelar su condición de VIH-positivas a sus compañeros sexuales. Contra quienes no cumplen con ello se pueden utilizar sanciones penales.

*“La policía no está cualificada para asumir el rol de «policía del sexo seguro» ni tampoco los estudios de epidemiología actuales justifican la necesidad de ello.”* (Scarlet Alliance, Australia)



### 3 El Derecho laboral

Muchos países no reconocen el trabajo sexual como trabajo y, consecuentemente, no han desarrollado leyes de empleo o laborales aplicables al trabajo sexual. Cuando el trabajo sexual no se reconoce como trabajo deja a las personas que ejercen el trabajo sexual sin compensación ante los empleadores que las explotan y sin derecho a sindicalizarse. No tienen acceso a indemnización por accidentes laborales, enfermedad o muerte, y pueden ser obligadas a trabajar en entornos físicamente inseguros e insalubres, a menudo en un sistema donde los costos para acceder al cuidado de la salud son demasiado altos para ellas.

Algunos países reconocen el trabajo sexual en el derecho laboral y tienen convenios laborales y normas de salud y seguridad diseñados específicamente para la industria del sexo. En estos contextos, el trabajo sexual puede ser reconocido en ámbitos como el derecho tributario, los derechos de propiedad industrial, los seguros y la planificación municipal, y las personas que ejercen el trabajo sexual tienen los mismos derechos y obligaciones que otros grupos de trabajadores. Algunas leyes laborales respecto al trabajo sexual establecen los dieciocho años como edad mínima para trabajar, requisitos de registro obligatorio y restricciones de espacio público tanto para las personas que ejercen el trabajo sexual de manera autónoma como para los establecimientos de trabajo sexual.

Aunque el trabajo sexual sea reconocido en el derecho laboral, suele persistir la dificultad para que las personas que lo ejercen hagan

valer y ejercer sus derechos. Por ejemplo, los empleadores, de manera generalizada, clasifican tramposamente a las personas que ejercen el trabajo sexual como trabajadoras autónomas para evitar pagar impuestos y las cotizaciones sociales, simultáneamente, controlan su tiempo y horarios como si fueran sus empleadas. Incluso, en el caso en que las personas que ejercen el trabajo sexual se reconozcan a sí mismas como trabajadoras por cuenta ajena, pueden seguir siendo reacias a llevar adelante reclamaciones laborales por temor a represalias y a perder ingresos.

**...los empleadores, de manera generalizada, clasifican tramposamente a las personas que ejercen el trabajo sexual como trabajadoras autónomas para evitar pagar impuestos y las cotizaciones sociales**

**“Queremos leyes laborales para el trabajo sexual, no leyes penales.”**  
(Myanmar Network of Sex Workers, Birmania)

**“Cualquier cambio en las leyes laborales realizado para incluir a las personas que ejercen el trabajo sexual no deberá crear una subclase de trabajadores en situación irregular ajenos a los beneficios de los derechos y tendrá que ser estructurada de manera que beneficie al mayor número posible de personas que ejercen el trabajo sexual.”** (Sex Workers Project at the Urban Justice Center, EE.UU)

## 4 Las leyes de inmigración

Las leyes de inmigración regulan el derecho de entrada y salida, así como el derecho de residencia, trabajo y acceso a los servicios sanitarios y sociales, en un país determinado. Existen muy pocos países con visas de trabajo disponibles para el trabajo sexual, incluso en aquellos en que es reconocido como una opción laboral. Ello sitúa a las personas

**Ello sitúa a las personas migrantes y viajeras que ejercen el trabajo sexual en riesgo de condiciones de trabajo explotadoras...**

migrantes y viajeras que ejercen el trabajo sexual en riesgo de condiciones de trabajo explotadoras, teniendo en cuenta que muchas veces están trabajando sin autorización. Si se conoce o sospecha (o ella lo admite) que una persona ejerce el trabajo sexual, algunos países establecerán prohibiciones para viajar, impidiéndole así la entrada en su territorio. Algunos países exigen pruebas de VIH como requisito para la entrada, lo que impide la movilidad y la migración para

personas VIH-positivas que ejercen el trabajo sexual, negándoles la entrada por su estado de salud. Muchos países tienen leyes que permiten a las autoridades migratorias deportar a alguien que está legalmente en un país si se descubre que está trabajando sin un permiso o ha sido condenada por algún delito, a veces ya habiendo cumplido pena de prisión. Las leyes anti-tráfico, que muchas veces clasifican erróneamente a los trabajadores como “traficados”, también colocan en riesgo de ser deportadas a las personas migrantes que ejercen el trabajo sexual sin documentación.

*“Las personas que ejercen el trabajo sexual migran legalmente pero cuando son arrestadas por ejercer el trabajo sexual, se les aplica las leyes de tráfico. La mayoría no hablan inglés y no se les facilita un traductor para que les explique el contenido del documento. Se les arrebató sus pertenencias y son sometidas a pruebas de detección de drogas.”* (PAMT and Asia Pacific Transgender Network, Malasia)

## 5 Las leyes tributarias

El Derecho fiscal es la rama del derecho que regula la forma en que el gobierno recauda dinero de los intercambios económicos. En la mayoría de países, todas las actividades que generan ingresos están sujetas a impuestos. En algunos lugares donde el trabajo sexual es legal, las personas que lo ejercen han de estar registradas y pagar impuestos.

Al igual que sucede entre otros colectivos de trabajadores y entre las personas que trabajan por cuenta propia, algunas personas que ejercen el trabajo sexual declaran sus ganancias y otras no. La falta de reconocimiento legal y la criminalización crean obstáculos para que las personas que ejercen el trabajo sexual puedan cumplir con el pago de impuestos. Quienes pagan impuestos por un supuesto trabajo por cuenta propia mientras, en realidad, están trabajando para terceras partes pueden inadvertidamente alertar al Estado acerca de empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales, lo que puede conllevar posibles represalias por parte del dueño del negocio. En países donde el trabajo sexual está reconocido como trabajo, algunas personas que lo ejercen son sobrevigiladas por las agencias fiscales, lo que afecta a su derecho a la confidencialidad y a la privacidad. Algunas personas que ejercen el trabajo sexual están expuestas a impuestos “especiales” o desproporcionados por los gobiernos de su región.

*“El Sistema fiscal [en Alemania] distingue el trabajo sexual como un trabajo “especial” y considera que sus trabajadores deben ser tratados de manera diferente y sujetos a leyes específicas. Esta situación debe modificarse. Todos los modelos fiscales separados deberían ser abolidos.” (Bufas, Alemania)*

## 6 Las leyes tradicionales o religiosas

Algunos países regulan el trabajo sexual mediante leyes religiosas; estas difieren en función del país y del contexto. Las leyes religiosas están sujetas a interpretaciones diversas y no se aplican de forma coherente.

**Bajo determinadas leyes religiosas, el castigo por mantener sexo fuera del matrimonio y los delitos relacionados con el trabajo sexual incluyen cárcel, agresiones físicas establecidas oficialmente e incluso condena de muerte.**

En algunos países las leyes religiosas se consideran Derecho Civil y solo se aplican a quienes deciden observar la religión. Bajo determinadas leyes religiosas, el castigo por mantener sexo fuera del matrimonio y los delitos relacionados con el trabajo sexual incluyen cárcel, agresiones físicas establecidas oficialmente e incluso condena de muerte. En algunas regiones, las transgresiones vinculadas al género (por ejemplo, “vestirse como el sexo opuesto”) están prohibidas por las leyes religiosas y las personas trans que ejercen el trabajo sexual y violan esta ley son, a menudo, encarceladas. Las leyes religiosas también prohíben la homosexualidad, lo que afecta a los

hombres que ejercen el trabajo sexual que tienen sexo con hombres y en las mujeres transexuales que ejercen el trabajo sexual y que son percibidas como hombres.

En los países que no están regidos por leyes religiosas, los gobiernos pueden, no obstante, estar influidos por doctrinas o consejos religiosos. Por ejemplo, los lobbies evangélicos, el clero católico o los valores de otros grupos religiosos fundamentalistas acerca de la conducta “inmoral o desviada” pueden influir mucho en las leyes laicas que, por ejemplo, prohíben la contracepción (incluido el uso del condón) y el sexo fuera del matrimonio, o restringir la atención de la salud sexual y reproductiva.

## 7 Las leyes internacionales

Las leyes internacionales pueden perjudicar o apoyar a las personas que ejercen el trabajo sexual, según los casos. Cada vez más, las personas que ejercen el trabajo sexual utilizan el derecho internacional relativo a los derechos humanos para abogar por un cambio, y los tratados de derechos humanos pueden ayudar a las campañas de apoyo realizadas por las personas que ejercen el trabajo sexual a favor de las reformas legales. Sin embargo, los mismos tratados pueden también ocasionar, contribuir o justificar las violaciones de derechos humanos que viven las personas que ejercen el trabajo sexual.

Un ejemplo de ello es la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres* (CEDAW, en sus siglas en inglés) de 1979. La CEDAW puede ser útil para las mujeres que ejercen el trabajo sexual, por ejemplo, mediante el uso de los “informes paralelos” de la CEDAW como una plataforma para poner de relieve las violaciones de derechos humanos. Por otra parte, el artículo 6 de la CEDAW exhorta a

los estados a tomar “todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de tráfico de mujeres y de explotación de la prostitución femenina.” Una definición excesivamente amplia de la explotación puede comportar el apoyo gubernamental para programas anti-tráfico opresivos y abusivos que perjudican seriamente a las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Esta ambigüedad de la CEDAW significa que la normativa puede ser utilizada para promover los derechos y libertades de las mujeres que ejercen el trabajo sexual pero también para que los gobiernos limiten estos mismos derechos y libertades.

Otras leyes que afectan a las personas que ejercen el trabajo sexual incluyen:

- **Las leyes que rigen la ayuda exterior de EE.UU.** La Ley de Liderazgo en la lucha del VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria contiene un

**El “Compromiso Anti-Prostitución” establece que los fondos no pueden ser utilizados para proveer asistencia a ningún grupo u organización que no tengan una política declarada en contra de la “prostitución”.**

“Compromiso Anti-Prostitución” (APP, en sus siglas en inglés). El APP exige que los grupos dedicados a la salud pública no residentes en EE.UU pero que sean receptores de fondos estadounidenses tienen que declarar su oposición al trabajo sexual como requisito para poder recibir fondos destinados a su trabajo de prevención del VIH. El APP establece que los fondos no pueden ser utilizados para proveer asistencia a ningún grupo u organización que no tengan una política declarada en contra de la “prostitución”. En junio de 2013, la Corte Suprema dictaminó que el APP era inconstitucional en el sentido de que violaba el derecho a la libertad de expresión de las organizaciones

estadounidenses. Sin embargo, el resto de destinatarios de los fondos del gobierno de EE.UU para el VIH/SIDA –los grupos internacionales– siguen sujetos a dicha exigencia.

## Conclusiones: principios para un marco jurídico que respete, proteja y reconozca los derechos humanos y laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual

Este documento pone de relieve los diferentes marcos jurídicos utilizados para castigar, oprimir o, en cualquier caso, controlar el trabajo sexual y a las personas que lo ejercen. Las personas que

**...las demandas de reformas se basan en objetivos y principios inequívocamente compartidos, los cuales respetan, protegen y reconocen los derechos humanos y laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual.**

ejercen el trabajo sexual en todo el mundo utilizan lenguajes diferentes en su lucha contra esta opresión, usando términos variados para describir los actuales - y los propuestos - marcos legislativos, muchas veces centrados en reformas que van más allá de modificar el Derecho penal. Mientras los términos utilizados para describir los marcos legislativos pueden ser discutidos, las demandas de reformas se basan en objetivos y principios inequívocamente compartidos, los cuales respetan, protegen y reconocen los derechos humanos y laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Estos principios han sido configurados –y reiterados –por los valores fundamentales de la NSWP que todos los miembros han suscrito:

- 1 La aceptación del trabajo sexual como un trabajo.**
- 2 La oposición a toda forma de criminalización u otra opresión legal del trabajo sexual (incluyendo a las personas que ejercen el trabajo sexual, los clientes, así como a terceras partes relacionadas\*, familias, parejas y amistades).**
- 3 El apoyo a la autoorganización y a la autodeterminación de las personas que ejercen el trabajo sexual.**

\*La expresión “terceras personas relacionadas” incluye a empresarios, propietarios y encargados de burdeles, recepcionistas, personal de limpieza, taxistas, hoteles que alquilan habitaciones a personas que ejercen el trabajo sexual y cualquier otra persona considerada facilitadora del trabajo sexual.



## Reconocimiento legal del trabajo sexual como trabajo

El reconocimiento legal del trabajo sexual se basa en la ausencia de un marco penal y el establecimiento de una normativa basada en los derechos laborales. Los miembros de la NSWP exigen que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo con los mismos derechos y protecciones que rigen otros trabajos, entre ellos el acceso a una normativa laboral y a normas de salud y seguridad en el trabajo. Además, el incumplimiento de dichas regulaciones y normas por parte de las personas que ejercen el trabajo sexual y los empleadores deben reconocerse en su contexto de estigmatización histórica, social y laboral. Las personas que ejercen el trabajo sexual también necesitan poder desafiar los prejuicios o el estigma sufrido por quienes los atienden (en lo público y lo privado) y por las autoridades estatales, a través de procesos de reclamación eficaces y con políticas y leyes anti-discriminación. La eliminación de los regímenes legales opresivos no garantiza la ausencia de opresión por sí misma. Para contrarrestar esta opresión, las leyes anti-discriminación deben reconocer a las personas que ejercen el trabajo sexual como un grupo históricamente discriminado.

**“El trabajo sexual ha de ser considerado como un trabajo, con las mismas protecciones para las personas que lo ejercen que disfrutaban otros trabajadores por cuenta propia y ajena...”**

*“El trabajo sexual ha de ser considerado como un trabajo, con las mismas protecciones para las personas que lo ejercen que disfrutaban otros trabajadores por cuenta propia y ajena. Las mismas leyes laborales, las mismas leyes relativas a la salud y la seguridad laboral, las mismas leyes fiscales, las mismas leyes de salud pública. Las personas que ejercen el trabajo sexual deben tener derecho a recibir protección por parte de las autoridades (policía, tribunales administrativos o agencias reguladoras y el poder judicial), al igual que el resto de trabajadores. La única excepción debe ser una ley que defienda de la discriminación por motivos relacionados*

*con las características de la ocupación; y no sólo para ellas, sino también para otros colectivos como son la policía, las monjas, los funcionarios públicos, etc.”*  
(NZPC, Nueva Zelanda)

## La eliminación de toda forma de criminalización y otras opresiones legales contra el trabajo sexual

(incluyendo a las propias personas que ejercen el trabajo sexual, los clientes, las terceras partes relacionadas, sus familias, parejas y amistades)

Las personas que ejercen el trabajo sexual exigen la descriminalización total del trabajo sexual. Se ha acordado, a nivel mundial, que cualquier criminalización u opresión legal es perjudicial para las personas que ejercen el trabajo sexual y debe procurarse una respuesta no punitiva.

## La auto-organización y la auto-determinación de las personas que ejercen el trabajo sexual

Las personas que ejercen el trabajo sexual deben poder asociarse, organizarse y sindicalizarse para lograr todos sus derechos laborales. Las personas que ejercen el trabajo sexual también quieren poder ejercer el gobierno de sus vidas sin interferencias externas o ser marcados por las leyes o la sociedad en general.

## Rechazo a toda ley que restrinja los derechos y las libertades de las personas que ejercen el trabajo sexual

Las personas que ejercen el trabajo sexual rechazan leyes especiales o distintas que pretendan “protegerlas” de la sociedad o de sí mismas. En su lugar, exigen que las normas laborales y de la industria se adapten a las características del trabajo sexual. Esto puede conllevar normativas específicas para el trabajo sexual pero estas no pueden nunca restringir los derechos y las libertades de las personas que ejercen el trabajo sexual.

**“No necesitamos leyes especiales; solamente que se retiren las leyes que nos castigan.”**

*“No necesitamos leyes especiales; solamente que se retiren las leyes que nos castigan.” (BHESP, Kenia)*

## El desarrollo de los programas y los servicios ha de ser dirigido por las personas que ejercen el trabajo sexual

Se ha demostrado que las organizaciones comunitarias, la promoción de la salud, los programas de prevención de las ITS y el VIH y el resto de servicios que son diseñados por las personas que ejercen el trabajo sexual son más eficaces cuando son ellas mismas quienes los dirigen, al estar basados en las realidades de las propias personas que ejercen el trabajo sexual.



**Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual**  
Promover los Derechos Humanos y de la Salud

The Matrix, 62 Newhaven Road  
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB  
+44 131 553 2555  
[secretariat@nswp.org](mailto:secretariat@nswp.org)  
[www.nswp.org](http://www.nswp.org)

NSWP is a private not-for-profit limited company.  
Company No. SC349355

PROJECT SUPPORTED BY:

